

Memorias, historias y ciudad

Resumen

El artículo se refiere al tema de la memoria y de la reparación de las víctimas de los conflictos armados. Sostiene que aunque las amnistías e indultos a los victimarios son necesarios en los procesos y acuerdos de paz, estos deben brindar oportunidades para la reconstrucción de una memoria colectiva que les permitan a las personas que han sufrido la violencia, encontrar sentido y explicación a sus dramas. La autora alude a la singularidad del conflicto colombiano y a las experiencias de Medellín con acuerdos de desmovilización y sometimiento a la justicia, cuyo énfasis ha estado en los pactos de perdón y olvido, pasando por alto la memoria de las víctimas y reconstrucción de “su” verdad. Se pregunta por la posibilidad real de poner en marcha procesos con altas dosis de memoria y verdad para las víctimas y, finalmente, plantea que la verdad es el punto de partida para construir la memoria y la historia de la ciudad; y que compete principalmente al Estado, pero también a la sociedad, la creación de “políticas de la memoria”.

Palabras claves: Memoria, violencia, olvido, reconciliación, justicia, reparación.

Memories, histories and city

Abstract

This article relates to topics of memory and victims' reparation in armed conflicts. It supports the idea that amnesty and pardon to the victimizers are necessary in any peace process or agreement, but they must provide opportunities for the reconstruction of a collective memory that gives the victims of violence the possibility to find sense and an explanation for their drama. The author makes reference to the singularity of the Colombian conflict and the experience of Medellín, a city that has implemented agreements of demobilization and submission to justice that have given great importance to the pacts of forgive and forget but have ignored the memory of the victims and the reconstruction of “their” truth. The article also questions the actual possibility of implementing processes with a high dose of memory and truth for the victims, and ends by claiming that the starting point to build the memory and the history of the city must be based on the truth, and that the creation of “policies of memory” must be a joint responsibility between the State and the society.

Key words: Memory, Violence, Forgetfulness, Conciliation, Justice, Reparation.

María Teresa Uribe de Hincapié. Socióloga. Magíster en Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y doctora *honoris causa* de la Universidad de Antioquia. Este artículo fue publicado en la primera edición de nuestra Revista Trabajo Social de la Universidad de Antioquia (Medellín, enero-junio de 2005, pp. 11-26), y volvemos a publicarlo por su vigencia y pertinencia en la actual coyuntura nacional.

Esta ponencia se presentó en el encuentro “Medellín y Buenos Aires se miran y se encuentran”. Mesa de discusión “Verdad, justicia y reparación”. Medellín, noviembre de 2004.

Memorias, historias y ciudad

María Teresa Uribe de Hincapié

Unas notas para empezar

El tema de la memoria y de la obligada reparación a las víctimas de los conflictos armados que atraviesan los países y las grandes ciudades, es un asunto que hoy agita el debate colombiano. Este debate ha estado impulsado tanto por la propuesta de una ley de alternatividad penal —hoy llamada de justicia y reparación— que haría parte de una eventual negociación con los grupos paramilitares, como por una suerte de convicción cada vez más arraigada entre varios grupos de población, según la cual no es posible afianzar una paz duradera ni las mínimas condiciones de convivencia y reconciliación haciendo a un lado la voz y la memoria de las víctimas, con la negación de una memoria colectiva en la cual puedan reconocerse los diversos actores armados y desarmados de la sociedad, y sin la reconstrucción de una historia plural que permita incorporar en los macrorrelatos nacionales y urbanos las huellas de una guerra que terminó involucrando, aun contra su voluntad, a todas las clases, sectores, grupos, estamentos, etnias, géneros y territorios de la nación.

Esto quiere decir, en primera instancia, que la recuperación de los relatos memoriales de las víctimas directas, de los victimarios, de los testigos y de las gentes que vivieron estos períodos oscuros —que para el caso colombiano aún no terminan—, cumplen esa tarea importante de poner en relación el pasado con el futuro, a través del presente. La memoria, a pesar de todas sus ambigüe-

dades, es una fuerza importante para la transformación de las sociedades y para el cambio de rumbo de la historia:

[...] la memoria no se ocupa de los hechos y de su orden cronológico, consigna huellas, impresiones, marcas y fracturas en la vida de los pueblos y de los individuos; la memoria está hecha de narraciones plurales, diversas, confrontadas, que selecciona, almacena, omite y resalta aquello que le permite encontrar sentido, individual y colectivo, y actuar con intencionalidad política frente al futuro (Barkhurst, 2000, pp. 91-104).

Pero, a su vez, la memoria es inevitable. Toda sociedad que ha pasado por guerras, conflictos armados o dictaduras, se ve abocada, en algún momento de su devenir, a vérselas cara a cara con un pasado incómodo, vergonzoso, doloroso o traumático con el cual es necesario saldar cuentas para proyectar algún futuro deseable, así este proceso sea sistemáticamente cercenado y excluido de la historia oficial y de los referentes identitarios, así se tomen muchos años, décadas o casi centurias para enfrentarlo, y así el proceso involucre a varias generaciones atrapadas en los recuerdos traumáticos de los conflictos. A pesar de todos los esfuerzos para encadenarla, la memoria sigue allí, pertinaz, insistente, latente, atesorada por familiares, vecinos y testigos, y emerge cada vez que las condiciones del presente requieran interpretaciones y explicaciones, pues al fin y al cabo el presente no es otra cosa que la huella de lo acontecido en el pasado y lo que este nos ha legado para construir racionalmente el futuro.

La memoria, además de inevitable, es una necesidad histórica, un imperativo ético y un recurso político; al respecto, algunas naciones, entre ellas Argentina, tienen un largo camino recorrido y muchas cosas que enseñarnos a nosotros que apenas lo iniciamos —al menos de manera pública y colectiva. Sin embargo, la naturaleza de los conflictos urbanos, sus degradaciones, la pluralidad de los actores armados, la diferenciación de las víctimas, las largas duraciones de los conflictos y su desigual presencia en los barrios y las comunas de la ciudad de Medellín, están indicando que no existen fórmulas únicas y satisfactorias, que estos procesos ameritan poner el tema en público y discutir ampliamente sobre la mejor manera de acceder a la verdad de lo ocurrido durante las últimas décadas en la ciudad y sobre la forma de resarcir en alguna medida la dignidad de las víctimas.

El propósito de este pequeño texto es, pues, contribuir a ese debate, poniendo de presente algunas de las particularidades de los procesos de guerra y paz en Medellín para determinar cuál sería la estrategia más adecuada y pertinente para liberar las memorias atrapadas en las guerras inconclusas y las amnistías parciales.

1. Los posconflictos segmentados

El nuestro es un conflicto multipolar, fragmentado, diverso, prolongado en el tiempo y diferenciado en los espacios, lo que quiere decir que no es compatible con experiencias de conflicto y guerra vividas por otros países, por lo siguiente: no estamos viviendo situaciones asimilables a un posconflicto, no es el final de una guerra civil, como en El Salvador o Nicaragua; no se trata del colapso de dictaduras militares, como en el Cono Sur, o de una guerra civil seguida de un orden autoritario de muchos años, como en España; tampoco nos encontramos frente a combinaciones de guerra y dictadura como en Sudáfrica. En Colombia hemos tenido desde hace casi veinte años posconflictos parciales y segmentados, negociaciones con diversos grupos armados —unas exitosas, otras fracasadas— que no suponen la terminación de las hostilidades ni su solución definitiva. Mientras se hace la paz con unos, se continúa la guerra con los otros.

Se trata de procesos de negociación y acuerdo segmentados, cuyo énfasis ha estado puesto en las amnistías (perdón al delito) y los indultos (perdón a la pena), en dudosos procesos de reinserción y en modelos de justicia transicional,¹ útiles para lograr acuerdos políticos pero a costa del olvido de las víctimas y sus historias, y con graves dificultades para reconstruir alguna forma de memoria colectiva, pues los perdones judiciales supuestamente implicarían perdones sociales y políticos; pero con frecuencia, los reinsertados terminan asesinados, acentuando lo que podría llamarse el laberinto de los espejos: haber sido víctima ayer parece justificar moralmente al victimario de hoy, en una cadena interminable de odios, venganzas y sangre que termina por darle vida a la figura del guerrero vengador, víctima, victimario y testigo al mismo tiempo (Orozco, 2002, pp. 79-94).

No deja de ser llamativo que todos los grupos armados que se disputan el control territorial y la sociedad civil organizada en la ciudad, enuncien el lenguaje de los agravios recibidos y de la sangre derramada como una justificación de sus acciones violentas, manteniendo un relato repetitivo que hunde sus raíces en las guerras civiles del siglo XIX; es decir, memorias autobiográficas y familiares atrapadas en las guerras que, como en un laberinto de espejos, reflejan y repiten de manera casi idéntica los imaginarios y los relatos configurados a lo largo de una historia centenaria. Se trata de un conflicto armado que no termina, que nunca se resuelve para dar paso a otro estadio social, manteniendo latente el “animus belli”, la hostilidad manifiesta, con periodos de agudización y aminoramiento; y

1 Sobre justicia transicional, véase: Rodrigo Uprimny y Luis Manuel Lasso. “Verdad, Reparación y Justicia para Colombia; algunas reflexiones y recomendaciones”, 2004, pp. 101-187.

que reproduce, en un presente perpetuo, las razones de los diferentes vengadores, así cambien y se transformen los contextos sociales y políticos.

La ciudad de Medellín ha sentido los efectos de estas guerras nacionales inconclusas y de las amnistías e indultos parciales, pero a su vez ha vivido sus propias guerras endémicas, sus inacabados procesos de paz y sus postconflictos armados, además de haber sido la sede de uno de los carteles de la droga más poderosos y sanguinarios del mundo, el cartel de Medellín.² Esto implica la presencia simultánea en la ciudad de varios actores armados (políticos y delincuenciales), incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, trenzados en una disputa territorial y de control hacia la población mediante la puesta en ejecución de estrategias de terror, crímenes atroces, masacres de jóvenes y población civil no involucrada, ajusticiamientos, desapariciones, desplazamientos forzados e intimidación generalizada.

No obstante, a principios de 1994 se puso en marcha un proceso de sometimiento a la justicia de algunos grupos armados que operaban en la ciudad (las Milicias Populares del Pueblo, las Seis y Siete de Noviembre y las milicias Independientes del Valle de Aburrá): milicianos que habían surgido como respuesta a la violencia desatada en los barrios por los atropellos de la policía, la delincuencia común, las venganzas mafiosas y las guerras entre pandillas o de estas contra agrupaciones guerrilleras. Este proceso de desmovilización y entrega de armas tuvo como contrapartida el compromiso estatal de hacer algunas inversiones públicas en los barrios donde operaban las milicias; sin embargo, no se contempló ninguna propuesta de reparación a las víctimas, nadie las mencionó ni les pidió perdón por los atropellos, no se nombró siquiera el daño que sufrieron los pobladores de los barrios, ninguno quiso recordar en público la estela de muerte, sangre y sufrimiento que dejaron a su paso; muy pocos desmovilizados fueron judicializados, y la mayoría regresaron a sus localidades como héroes que vuelven de la guerra; además, mediante la conformación de una cooperativa de vigilancia y seguridad, la administración local les entregó la custodia del orden público para desarrollar las actividades que hacían antes, pero esta vez en representación de la institucionalidad.

Este modelo de paz y reconciliación fue un fracaso, pues a la vuelta de un año casi todos los comandantes habían sido asesinados, y la mayor parte de

2 Para ampliar sobre el conflicto armado y la violencia en la ciudad de Medellín, véase: Ana María Jaramillo *et al.* *En la encrucijada: Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa*, 1998.

los sobrevivientes se incorporaron a nuevos y viejos aparatos de violencia, bien con los narcotraficantes, bien con las bandas delincuenciales o con las organizaciones urbanas de los grupos paramilitares. Este modelo de acuerdo político supuso en la práctica una autoamnistía: se perdonó tanto el accionar violento de las milicias como el terror policial y militar, y se silenció todo aquello que perturbara la aparente paz conquistada.

Una segunda experiencia de posconflicto segmentado se está viviendo en este momento. Como parte de los acuerdos entre el gobierno y los paramilitares, asistimos a un espectáculo bastante curioso en Medellín: la desmovilización y entrega de armas del Bloque Cacique Nutibara que actuaba en la ciudad, especialmente en los barrios del norte y el occidente; sin embargo, por revelaciones del propio gobierno nacional, hoy se sabe que el bloque mantiene una vanguardia armada mediante la cual sigue ejerciendo su poder autoritario en muchos espacios de la ciudad, y que al menos el 30% de quienes entregaron las armas no pertenecían a esta organización y fueron incorporados a última hora quizá para aumentar artificialmente el contingente desmovilizado.

Esta vez tampoco se mencionó a las víctimas, nadie hizo el relato de los crímenes y las vejaciones sufridas por ellas; no se recordó a los muertos, a los desaparecidos, a los desplazados, a quienes fueron desalojados a sangre y fuego de sus barrios y sus precarias viviendas; los comandantes del bloque pidieron un perdón genérico por los problemas que hubieran podido causar en lo que llamaron “su heroica lucha por la salvación de la patria y el orden en la ciudad”; de esta manera, las víctimas perdieron por partida doble, en la guerra y en la paz.

Tanto ahora como antes, en ausencia de los relatos memoriales de las víctimas, de la preservación de alguna forma de memoria colectiva, se recurre a los viejos imaginarios y a los discursos que han venido acompañando todos los procesos segmentados de negociación y acuerdo en la ciudad y en el país; en nombre de la paz y la democracia, se invoca el olvido del pasado, el perdón a los victimarios, la reconciliación, para hacerles más fácil su reincorporación a la sociedad, y el llamado expreso a la no violencia. No obstante, de ese discurso sustentado en los más sagrados principios del Estado de derecho han sido asépticamente cercenadas las víctimas, sus dolores y sus rabias; ha sido subordinada la verdad a las exigencias de la negociación y, en aras del futuro, se ha sepultado el pasado.

El discurso democrático y de la no violencia, tan válido en sus fundamentos filosóficos y éticos, y tan importante para construir proyectos de sociedad más justos y pluralistas, pronunciado en estas circunstancias y con estos anteceden-

tes se vuelve anodino, no le dice nada a nadie y resulta de un total irrespeto para con las víctimas, pues este discurso, instrumentalizado a veces desde el poder, resulta útil para esconder otras historias trágicas que casi nadie quiere oír, para escatimar verdades no dichas, para silenciar palabras de acusación y de sindicación y, tal vez, para tranquilizar algunas conciencias que ingenuamente piensan que las verdades son enemigas de las democracias y que las memorias le producen ruidos innecesarios a los propósitos de construir el nuevo país. Sin embargo, las memorias no se dejan encadenar ni sepultar bajo la pesada loza de los perdones judiciales, y si no se tramitan adecuadamente reproducen a perpetuidad el viejo laberinto de los espejos.

La verdad es el primer requisito para la justicia, la reparación y el perdón; aun así, valdría la pena discutir sobre la posibilidad real de poner en marcha procesos de esta naturaleza en la ciudad, en un contexto de posguerra segmentada y en contravía de los propósitos expresos del gobierno nacional, orientados a intensificar la guerra.

2. La movilidad de las víctimas y de los victimarios

Otra diferencia significativa de nuestro conflicto armado, además de la pluralidad de actores, es que las víctimas no están de un solo lado, como ocurre con el terrorismo de Estado puesto en marcha durante las dictaduras militares del Cono Sur; es decir, no estamos frente a un modelo de victimización vertical con un victimario único y bien identificado (Uprimny y Lasso, 2004, p.115); tampoco se trata de modelos horizontales donde las víctimas están situadas en dos lados claramente definidos, como ocurrió en las guerras civiles de Centroamérica o de los Balcanes. En el caso colombiano, Medellín puede ser el ejemplo paradigmático: todas las clases, los estamentos, las organizaciones sociales, los barrios y los corregimientos se han visto afectados alternativamente por varios de los actores armados, en el contexto de un conflicto móvil que se fragmenta, se diversifica, se desconfigura y reconfigura con una dinámica acelerada, donde a veces no es posible identificar claramente al potencial victimario ni saber de quién es necesario precaverse.

En Medellín, los actores armados son móviles, cambiantes, puede ser cualquiera o ninguno; el protector de ayer puede ser el victimario de mañana, el que ostentaba una etiqueta bélica puede cambiarla, lucir otra y desde ambas ejecutar violencias y afectar significativamente al mismo o a otro conglomerado social. De esta movilidad no se escapan las alianzas transitorias, a veces paradó-

jicas, para enfrentar a un enemigo común; ni las fragmentaciones de las grandes organizaciones mafiosas, delincuenciales o paramilitares que protagonizan intensas luchas de exterminio en su interior; tampoco se escapan, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado, que a veces actúan como tales —legal o ilegalmente— con su caudal de violación de los derechos humanos; ni otras, como aliados, apéndices o simpatizantes de carteles del narcotráfico, grupos paramilitares o grandes bandas de delincuencia común.

Pero visto en su conjunto, el asunto es más complejo porque al lado de los actores armados, y un poco en la penumbra de la vida civil, se pueden ubicar auxiliares, colaboradores, financiadores, auspiciadores, informantes y toda una fronda de apoyo a los perpetradores de actos violentos y de violación sistemática de los derechos humanos. Esto implica que no estamos frente a un modelo de “barbarie simétrica”, como la llama Iván Orozco (2002, p. 88), y que el modelo prevaleciente en la ciudad se acerca más a una combinación de victimización vertical y horizontal con predominancia de uno u otro modelo, de acuerdo con los espacios y con los tiempos.

La porosidad de las organizaciones armadas, la movilidad de sus efectivos, las extensiones de las redes de apoyo de cada cual, tiene repercusiones significativas en las memorias literales o autobiográficas de las víctimas y en las posibilidades de construcción de memorias colectivas, pues una misma familia o un mismo grupo de pobladores puede haber sido víctima, sucesivamente, de varios grupos armados, incluidos los del Estado, lo que dificulta en gran medida la elaboración de los duelos, la conmemoración de los muertos e incluso la configuración de un yo narrativo, individual o colectivo, que continúe siendo él mismo, a través de las diferentes experiencias vividas y que permita la autointerpretación y algún sentido de identificación de su propio ser y estar en el mundo. Ante la ausencia de un yo narrativo, cualquier intento por construir memorias colectivas se dificulta, las identidades individuales se fracturan y se disocian contribuyendo por esta vía a acentuar la gran fragmentación de la sociedad.

Quizá por esas razones, el conflicto colombiano nunca se nombra en términos de víctimas y victimarios, y poco se alude a las responsabilidades que le caben a cada cual en este enorme desastre humanitario; en su defecto, desde los años cincuenta, la sociedad colombiana ha venido aludiendo a un término eufemístico, La Violencia —así, con mayúscula—, para nombrar sin nombrarlos, y adjetivándolos, a los sujetos que causaron tanto daño en la vida de tantas personas, en sus bienes, en sus trayectorias existenciales, en sus presentes dramáticos y en sus futuros inciertos. A su vez, estas situaciones son vividas por las

víctimas como un destino ineludible, como una tragedia natural que no se sabe muy bien de dónde vino, por qué se ensañó con ellos y cuándo puede volver a suceder; esta es otra faceta de la desintegración del yo narrativo.

Otro aspecto que acentúa estas porosidades y movilidades entre víctimas y victimarios tiene que ver con la larga duración de los conflictos, con el ánimo hostil que en ciertas coyunturas se agudiza y en otras pareciera aminorarse, que se desenvuelve desigualmente en las regiones, y que a lo largo de tantos años puede asumir diversas modalidades, incorporar nuevos actores, reciclar a los viejos y, lo más importante, interactuar de diferente manera con pobladores y habitantes de los diversos espacios territoriales; a veces, mediante la fuerza brutal y el terror extremo, y en otras ocasiones por medio de aproximaciones de corte más consensual, persuasivo y colaborativo, al modo de los clientelismos y los gamonalismos tradicionales.

Los pobladores saben —porque la memoria ha sido maestra en esto— que todo dominio es frágil, móvil, inestable, que puede cambiar en poco tiempo y ser sustituido por otro grupo enemigo, o que pueden regresar los que estaban antes a pedir cuentas; es explicable entonces que las gentes opten por el silencio, el acomodamiento, el refugio en la esfera doméstica o privada, o que prefieran, como dice María Victoria Uribe, “enterrar y callar”, porque poner el dolor en público, pedir cuentas y señalar culpables puede desatar nuevos ciclos de violencia y exterminio.

Quizá lo único que identifique hoy a las diversas clases de víctimas en la ciudad sean sus heridas morales, el dolor por las pérdidas, los sufrimientos por los desarraigos y los atropellos; esta suerte de identidad surgida de lo vivido, parecería una forma viable para desatar las memorias atrapadas en la guerra, pero las escasas experiencias con las organizaciones de víctimas en Medellín han puesto de manifiesto que cuando se intenta ir más allá, emergen con fuerza lo que se ha llamado “las memorias rivales”, las memorias mosaico, las memorias en disputa, lo cual genera un escenario que solo logra reproducir o, si se quiere, reflejar, como en un espejo trizado, los fragmentos y los antagonismos de la sociedad urbana en su conjunto.³

El problema no es la emergencia de memorias rivales, o que en un conflicto de estas características la memoria se convierta en otro campo de batalla, esta

3 Sobre el concepto de memorias rivales, véase: Juan Carlos Vélez Rendón, “Una Comisión de la verdad en la encrucijada colombiana”, 2003.

vez simbólico, donde se crucen recuerdos, sindicaciones, negaciones y explosiones de rabia, venganza y retaliación; que ocurra algo así es explicable, pero el reto está en lograr que estas memorias rivales no se queden fijadas en el pasado y la unilateralidad, pues de poco sirve enunciar los atropellos del enemigo y silenciar los propios; el propósito es lograr el tránsito hacia aprendizajes políticos, que las víctimas logren un olvido razonable y los victimarios recuerden y asuman la responsabilidad que les cabe con todas las consecuencias jurídicas, éticas y políticas que ello implique.

Lo que no parece una estrategia adecuada es pasar por encima de la memoria de las víctimas como si ellas nunca hubieran existido o como si fueran de alguna manera responsables de lo que les sucedió; o que el derecho a la verdad, que les asiste a todos los pobladores urbanos, sea sustituido por una retórica contra la guerra sin apellidos, contra la violencia sin responsables, por el derecho a la vida y a la paz sin nombrar a quienes la perturban, situación que se vuelve insostenible cuando los familiares de las víctimas tienen que convivir en el mismo barrio con victimarios reconocidos, y aceptarlos, ya sea como representantes del orden institucional, o como los héroes que pacificaron la ciudad y ahora tienen derecho a representar a la sociedad en los diversos espacios políticos.

Existen muy diferentes formas de resarcir a las víctimas, pero quizá la más elemental sea decirles públicamente que sus muertos son de todos, que la ciudad los recuerda sin diferencias, que hacemos nuestro el dolor que los embarga, y que cada vez más personas nos empeñaremos en luchar contra el olvido.

3. Ni historia oficial ni olvido general

El tercer eje diferencial del conflicto colombiano, relacionado con otras situaciones vividas en América Latina, tiene que ver con las particularidades de la historia y el olvido. No estamos frente a una política pública que cercene sistemáticamente el pasado, que intente tergiversarlo o que trate de anular e impedir que se enuncien historias alternativas; no existe en la ciudad ni en el país algo que pudiéramos denominar “historia oficial”, convertida en libros de texto y de obligatoria difusión en las escuelas, tal como ocurrió en la España franquista,⁴ por ejemplo; en otras palabras, no existe un relato único que tenga la pretensión de convertirse en historia patria o nacional y contra el cual

4 Al respecto véase: Josep Fontana (compilador), *Enseñar historia con una guerra civil de por medio*, 1999.

podrían surgir interpretaciones alternativas o críticas, pues esta ha sido una guerra de perdedores, de la que nadie quiere hacerse cargo.

Por el contrario, en la amplia fronda burocrática del Estado subsiste una multitud de interpretaciones y aproximaciones sobre lo acontecido —y esto, sin contar las versiones de los intelectuales, los periodistas, los historiadores y toda clase de analistas de la vida reciente en la ciudad—, y más que una historia oficial que sustituya a las demás, lo que ha predominado en Colombia es la prehistoria o, si se quiere, la tendencia a pensar el pasado como si fuera algo nefasto de lo cual es mejor ni acordarse, y la tentación de situarse siempre en la frontera fundadora de un nuevo orden, donde entonces sí empezaría la historia.

Esta apuesta por satanizar el pasado es un eje que recorre la vida republicana del país desde el siglo XIX; de allí que en nuestro caso, la estigmatización de la memoria sea presentada a los públicos de ahora y de antes como la única manera posible de asegurar alguna forma de convivencia y reconciliación. El olvido y el perdón, en este registro, serían un imperativo moral para los buenos cristianos, una virtud ciudadana para quienes proclaman la democracia, y el recurso por excelencia para refundar la política, una vez superado el magma originario de una prehistoria violenta.

En el imaginario nacional no tiene buen recibo eso de recordar, denunciar, preguntar e indagar por lo ocurrido; no hay que resucitar a los muertos, ni despertar los viejos fantasmas; no debe mirarse al pasado, que es una larga sucesión de guerras y de violencias, innombrables e inexplicables, y la construcción de futuro demandaría un ejercicio de amnesia colectiva, un recomienzo permanente, una perpetua fundación del nuevo orden. El resultado no buscado de estos imaginarios ha sido el de una suerte de pacto de silencio y olvido, entre rebeldes y gobierno, entre delincuentes y autoridades, entre víctimas y victimarios, con un costo político altísimo para todos los que concurren a este pacto y para la sociedad en su conjunto.

Esta apuesta contra el pasado, este pacto de silencio, ha estado definido y en cierta forma garantizado por los perdones judiciales, las amnistías y los indultos que, al decir de Gonzalo Sánchez, “han operado como política de olvido o forma de contramemoria” (2003, p. 92), pues no debe olvidarse que los perdones judiciales son de doble vía: se exonera a los rebeldes pero también a las autoridades y a las fuerzas de seguridad del Estado, se indulta a los enemigos pero también a los amigos. A su vez, cada acuerdo firmado, cada negociación, cada indulto se representa en el imaginario nacional como un nuevo pacto fundacional, como el

inicio de una nueva era, como un recomienzo de la política y el principio de un nuevo orden justo, democrático e igualitario; lo de antes no vale la pena mencionarlo, era el caos, la barbarie, el desorden, la prehistoria, lo que es necesario dejar atrás, sepultado para siempre de manera que no perturbe los sanos propósitos de reconciliación y convivencia.

Esta reiteración de autoamnistías múltiples o de amnistías amnésicas deja a las sociedades y a las víctimas con una sola certeza: la del sinsentido; la percepción de una lucha fratricida que los envolvió, de un destino trágico que los arrastró, de haber vivido épocas oscuras de las cuales es mejor no hablar, y menos recordar. De ahí surgen las grandes dificultades para escribir la historia de la violencia en Colombia, desde los años cincuenta hasta ahora, o para construir memorias colectivas que les permitan a las gentes que las vivieron y las sufrieron encontrarles sentido y explicación a sus dramas personales o familiares.

Es evidente que la mejor manera de terminar un conflicto armado es mediante las negociaciones y los acuerdos, que en estas situaciones se impone la justicia transicional, que sin indultos o amnistías es imposible que los alzados en armas consideren la posibilidad de dejarlas; lo que resulta intolerable es que esto se realice a costa de la negación del pasado, del olvido de las víctimas y del irrespeto por sus heridas abiertas, de las memorias truncadas y las historias imposibles, de los dramas sin explicación, de las preguntas sin respuesta y de los gritos ahogados en las gargantas de los afectados.

Tampoco parece muy conveniente que estos procesos de amnistía e indulto se realicen sin participación de los deudos y de la sociedad en su conjunto, que tiene el derecho de saber la verdad, pues la contrapartida de los perdones generales son las culpas colectivas, el “todos somos culpables”, que es la estrategia más eficaz para esconder y ocultar, y para impedir que se establezcan responsabilidades efectivas, distinciones y gradaciones específicas en torno a todos aquellos actos que demandan no ser olvidados como condición para la construcción de futuro.

A pesar de esta apuesta por el olvido, no puede afirmarse que este sea un país sin memoria, como parecería deducirse de lo anterior y tal como se afirma frecuentemente, porque los muertos de las guerras civiles y las violencias no se dejan enterrar y las víctimas directas e indirectas nunca renuncian a sus exigencias de verdad, justicia y reparación; ni los pueblos que han vivido épocas de horror y desesperanza deponen su derecho a saber. Como la memoria es inevitable, reaparece muchas veces a lo largo del devenir de las ciudades, a veces en forma de mito, y otras a través de la literatura, la pintura, el cine, la fotografía;

en fin, de las manifestaciones artísticas, que son las únicas capaces de expresar lo innombrable; no obstante, en Medellín la memoria ha servido como estrategia política para exorcizar el olvido y construir algún futuro deseable.

Para ocuparnos solo de este último aspecto, tendríamos que señalar que los habitantes de los barrios urbanos, los gremios, las asociaciones, las organizaciones sociales y políticas, y las universidades han venido poniendo en práctica, por su cuenta y riesgo, sin ningún apoyo estatal —y a veces con su franca hostilidad—, algunas estrategias de lucha contra el olvido, y han llevado a cabo lo que podríamos llamar “políticas de memoria”.

No hablo únicamente de las series históricas que conservan algunas ONG de derechos humanos sobre asesinados, desaparecidos, secuestrados, desplazados o torturados; tampoco de las memorias literales, historias de vida, denuncias judiciales o relatos de los afectados. Existe en esta ciudad una extensa literatura memorial dispersa en muchos textos, investigaciones y bancos de datos, pero la mayoría de las veces estas narraciones y estadísticas circulan en espacios domésticos y privados o en contextos muy restringidos y especializados, sin la posibilidad de ser ventiladas en público y de llegar a auditorios amplios para ser confrontadas con otras memorias opuestas o complementarias que permitan ir construyendo historias con sentido.

En relación con este tema, a lo que quiero referirme ahora es a las políticas de memoria que vienen poniéndose en práctica en la ciudad, de las cuales se conoce poco y no se ocupan los medios de comunicación; podemos resaltar la presencia semanal de las madres en el atrio de la Iglesia de la Candelaria que, siguiendo las huellas de las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, se reúnen semanalmente para preguntar por sus hijos desaparecidos, secuestrados o asesinados; las madres de Villa Tina, quienes después de un largo y difícil proceso de lucha lograron la condena al Estado colombiano por la masacre de sus hijos —niños y adolescentes— a manos de la policía en aquel barrio; en conmemoración de este hecho, y como algún acto de reparación, se instaló un monumento recordatorio en el Parque del Periodista, en el centro de la ciudad.

También vale la pena mencionar la colcha de retazos elaborada por el movimiento gay donde se consignan en pedazos de tela nombres, fotografías, fechas y lugares de los asesinatos de sus compañeros y compañeras a causa de sus preferencias sexuales, o los mapas elaborados por la Unión Patriótica —partido de izquierda surgido de uno de los procesos de paz, y prácticamente eliminado por paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado— donde se anotan lugares

y nombres de sus militantes asesinados. En algunos barrios de la ciudad, los habitantes han venido escribiendo en paredes, columnas, sardineles o lugares públicos, los nombres de los jóvenes residentes que han perdido la vida de manera violenta, y son múltiples y variados los rituales, las conmemoraciones y las actividades culturales que se realizan en sindicatos, asociaciones y universidades para mantener viva la memoria de sus asociados.

En este momento, el municipio de Medellín está realizando un inventario sobre estos vehículos de la memoria, como los llama Elizabeth Jelin, y verdaderamente sorprenden su cantidad, su pluralidad, y las formas tan imaginativas y creativas que han encontrado los pobladores de esta ciudad para romper el silencio, conjurar el miedo, exorcizar el olvido y darles alguna forma de salida no violenta a la indignación, la rabia, la impotencia y el desamparo. Esto quiere decir que a pesar de los pactos de silencio y de la satanización del pasado, los pobladores de la ciudad siguen recordando, indagando y tejiendo memorias e historias; el paso siguiente sería el de ponerlas en público con todo el apoyo y el respaldo institucional, y con todas las salvaguardas necesarias para evitar que se conviertan en un nuevo territorio de la disputa.

Para concluir

Es evidente la necesidad de esclarecer la verdad sobre los hechos de violencia y muerte ocurridos en la ciudad durante las últimas décadas, no solo en términos individuales sino también colectivos, y la única manera de evitar que los perdones judiciales —necesarios e incluso deseables— conduzcan a un olvido facilista es compensando la eventual ausencia de justicia con altas dosis de memoria y de verdad. La obligación de los Estados y las administraciones locales es recordar y hacer recordar, creando las garantías necesarias para desatar las memorias atrapadas en la guerra, y los climas apropiados de respeto y de confianza para evitar, en la medida de lo posible, lo que ocurre cuando se abre sin precauciones la caja de Pandora.

De allí que sea absolutamente necesario emprender un debate amplio sobre la manera de llevar a cabo un proceso de verdad en la ciudad, sobre el cuándo y el cómo hacerlo, sobre las garantías que pueden tener las víctimas para enunciar sus palabras sin interferencias o amenazas de viejos y nuevos victimarios; para que estos o quienes resulten implicados puedan expresar sus razones, relatar sus historias y contar, si es del caso, con todas las garantías del debido proceso, y con una sana reinserción a sus entornos barriales.

La verdad es apenas el inicio de un largo y difícil proceso; es solo el punto de partida, incierto pero necesario, para construir la memoria y la historia de la ciudad, y para lograr que algún día, como dice Iván Orozco, sea posible desterrar de este espacio a las Erinias, divinidades griegas de la venganza, y reemplazarlas por las Euménides, diosas protectoras y benefactoras de la ciudad (Orozco, 2002).

Referencias bibliográficas

- Barkhurst, David. 2000. Memoria, identidad y psicología cultural. En: Alberto Rossa Rivero, Guglielmo Bellelli y David Barkhurst (editores). *Memoria colectiva e identidad nacional*. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 91-104.
- Fontana Josep (compilador). 1999. *Enseñar historia con una guerra civil de por medio*. Barcelona: Crítica.
- Jaramillo Ana María et al, 1998. *En la encrucijada: conflicto y cultura política en el Medellín de los noventas*. Medellín: Corporación Región.
- Orozco Abad, Iván. 2002. La posguerra colombiana: divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación. *Análisis Político* N.º 46. Bogotá, Iepri, mayo-agosto, pp. 79-94.
- Sánchez Gonzalo. 2003. *Guerras, memorias e historia*. Bogotá: Ican.
- Uprimny, Rodrigo y Luis Manuel Lasso. 2004. Verdad, Reparación y Justicia para Colombia: algunas reflexiones y recomendaciones. En: *Conflicto y Seguridad Democrática*. Bogotá: Fundación social Friedrich Ebert y Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, pp. 101-187.
- Vélez Rendón Juan Carlos. 2003. Una Comisión de la verdad en la encrucijada colombiana. *Estudios Políticos* N.º 23. Medellín, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, pp. 29-51.